



COMUNICADO

Enero 27, 2018

Caravana por la Dignidad llama a seguir lucha contra la corrupción

La lucha por Chihuahua es la lucha de todos los mexicanos, porque la corrupción no sólo está presente en la situación que enfrenta ese estado norteño, y una prueba de ello es este *Frente Ciudadano Anticorrupción* que surgió como una reacción obligada a los continuos actos de cinismo que desembocaron en el video escándalo, publicado el pasado 12 de junio, que reveló la *ecuación corrupta* que hoy sigue intocada en el Congreso del Estado, con sus extensiones en toda la clase política que este viernes le colocó la lápida al Sistema Estatal Anticorrupción con el nombramiento de un Fiscal Anticorrupción a modo del gobernador Juan Manuel Carreras López.

Nos congratula que este lunes pasará por esta ciudad la *Caravana por la Dignidad #UnidosConValor*, que encabeza Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua, y queremos anunciar que el Frente participará en los actos que se tienen previstos, como una forma de expresarle que no está solo, porque así como encabeza la esperanza de los chihuahuenses en una auténtica lucha contra la corrupción en esa entidad, reconocemos que su lucha es la de todos los mexicanos porque el flagelo de la corrupción tiene su propia expresión en cada rincón del país, como aquí en San Luis Potosí ha quedado constancia de muchas formas.

Marchar por la Dignidad no es algo que nos resulte desconocido a los potosinos. En mayo de 1983, el doctor Salvador Nava Martínez encabezó una caminata que se le conoció con ese nombre, y también como Marcha por las Participaciones, por el estrangulamiento económico a su administración municipal por parte del cacique Carlos Jonguitud Barrios. En septiembre de 1991, con otra Marcha por la Dignidad con rumbo a la ciudad de México, el movimiento encabezado por Nava Martínez evitó la imposición de Fausto Zapata Loredó como gobernador, tras una elección fraudulenta.

Recibir ahora a la Caravana por la Dignidad, que encabeza Javier Corral, representa un recordatorio a los potosinos sobre los rumbos que suele tomar una corrupción rampante como la que hoy aqueja a nuestro Estado. El momento resulta oportuno para alertar al pueblo de San Luis Potosí sobre la instauración de un nuevo CACICAZGO, igual o peor de nefasto que los que padecieron nuestros padres y abuelos. Si durante el Siglo XX los potosinos tuvimos que desterrar tres cacicazgos (el cedillista, el santista y el jonguitudista), alertamos que con Ricardo Gallardo Juárez como cabeza visible, surge un grupo caciquil estilo Siglo XXI: aprovecharse de los recursos públicos para someter a los ciudadanos por la vía de la dádiva clientelar y la

distracción con espectáculos populares, el chantaje vía intereses comerciales y de negocios, y la intimidación.

Un grupo caciquil Siglo XXI que se apropia de los cargos de elección popular para convertirlos en un reparto de posiciones entre un clan familiar y sus incondicionales, y que aprovecha la impunidad que permite un convenenciero vacío de poder con un gobernador y un Congreso estatal que, incapaces de dar paso a un verdadero Sistema Estatal Anticorrupción, se exhiben como cómplices en la generación de una red de impunidades de la que también resultan beneficiarios. Las señales de alerta son claras:

- Un Sistema Estatal Anticorrupción que es una farsa como lo muestra el bloqueo a su puesta en operación y la omisión de contemplarlo en la Ley del Presupuesto de Egresos para este año.
- La impunidad que prevalece en el caso de los actos de corrupción confesos y documentados de los diputados locales, tanto de la *ecuación corrupta* como de la apropiación de recursos a través de falsas dádivas y compra de facturas.
- La impunidad y encubrimiento por parte de la Fiscalía General y de la Auditoría Superior del Estado a actos de corrupción plenamente documentados de la administración de Gallardo Juárez como:
 - La compra irregular de medicamentos por más de 66 millones de pesos en tres meses a una proveedora fantasma de nombre Sandra Sánchez Ruiz.
 - La proliferación de obras *pantalla* sin licitaciones y confesamente *autoasignadas* a las constructoras de reciente creación del propio alcalde.
 - El desproporcionado enriquecimiento de la familia Gallardo a partir de su incursión en los cargos públicos que ostentan.
 - Los centenares de despidos de trabajadores municipales cuyos laudos laborales auguran una crisis económica de grandes dimensiones para la administración municipal.
 - El abierto ocultamiento de los egresos de la administración municipal, y muchos otros casos más

Por estas, y muchas otras razones, acompañar a la Caravana por la Dignidad es mucho más que un gesto de solidaridad con el pueblo de Chihuahua y su gobernador que –a diferencia del nuestro– da muestras de ser un efectivo representante de los intereses de la comunidad. Acompañarlos será una forma más de levantar la voz para llamar al pueblo a la indignación, a dejar la apatía porque contamos con un ejemplo, como los que en su tiempo vivimos aquí, de que la movilización ciudadana es la mejor opción para combatir a la corrupción.